

Declaración Nacional e Internacional

**RECUPEREMOS  
LA SOBERANÍA  
de COLOMBIA  
EN DEFENSA  
DEL AGUA, LA VIDA  
Y LOS TERRITORIOS**



La presente declaración fue impulsada por una coalición de comunidades afectadas y organizaciones sociales nacionales e internacionales, que **pedimos al gobierno de Colombia revisar integralmente y retirarse de tratados que les dan poder a empresas transnacionales extractivas**, como Glencore y las canadienses Eco Oro, Galway Gold y Red Eagle. Estas corporaciones han demandado al gobierno de Colombia ante tribunales supranacionales diseñados para favorecer sus intereses, que son incompatibles con los derechos humanos y la protección del ambiente. Estas demandas o la simple amenaza de demandas tienen un efecto negativo y van en contra de las leyes, políticas públicas y decisiones judiciales que necesitamos para enfrentar la crisis climática, salir del extractivismo y construir el camino hacia la transición energética con justicia social y ambiental.

**La declaración fue firmada por más de 300 organizaciones nacionales de Colombia y organizaciones y redes regionales e internacionales de más de 30 países de todos los continentes.**

Lo que las organizaciones firmantes buscamos es contribuir a recuperar la soberanía del Estado colombiano, para tomar decisiones en favor de su pueblo, defender la independencia y rol del sistema judicial, así como respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas y las comunidades que buscan justicia y rendición de cuentas antes los daños ambientales y violaciones de sus derechos provocados por empresas transnacionales extractivas. Esto se logrará, solamente si el gobierno revisa los acuerdos de inversión y los tratados comerciales que le dan poder a estas empresas para frenar cualquier medida de interés público que el gobierno pueda tomar en favor de las poblaciones vulnerables o para proteger los ecosistemas nacionales.

Entre mayo y junio de 2023, esta declaración, junto con las firmas de organizaciones que se adhieren al llamado, ha sido remitida y entregada al gobierno de Colombia mediante mecanismos formales y a través de reuniones con autoridades y congresistas de Colombia.



Declaración Nacional e Internacional

## RECUPEREMOS LA SOBERANÍA de COLOMBIA EN DEFENSA DEL AGUA, LA VIDA Y LOS TERRITORIOS

### **Declaración dirigida al gobierno de la Potencia Mundial para la Vida, por una revisión del sistema de Tratados de Inversión y de Libre Comercio en Colombia**

Los abajo firmantes somos comunidades, organizaciones sociales y redes de Colombia, América Latina y del mundo que **defienden la vida, el agua y los territorios del accionar depredador de las empresas transnacionales extractivas convocadas por una coalición de organizaciones nacionales e internacionales**. El interés de lucro que tienen estas empresas se traduce en destrucción en los territorios donde operan, así como en la impunidad por la existencia de instrumentos supranacionales que las protegen. En muchos casos, **cuando las comunidades locales y organizaciones sociales logran obtener medidas de protección para sus territorios, estas empresas utilizan estos instrumentos para amenazar a los gobiernos e influir en estas decisiones**. Por esta razón, como comunidades y organizaciones que defienden el territorio, también buscamos el desmantelamiento de este andamiaje de poder que protege a las empresas transnacionales. En este contexto, si el actual Gobierno colombiano tiene como bandera ser una potencia mundial de la vida que se enfrenta a los desafíos de transformar la dependencia de extractivismos, y una transición justa de los combustibles fósiles que están poniendo en riesgo la sostenibilidad de la vida en el planeta, es urgente enfrentar el ilimitado poder corporativo y desmontar el sistema que socava la soberanía y las obligaciones de los Estados de protección de los derechos humanos, la salud humana y de la naturaleza.

Una de las manifestaciones de **ese poder ilimitado se concentra en el sistema de acuerdos internacionales de inversión que se firman entre Estados**. Este sistema permite a las empresas extranjeras demandar a los Estados ante un sistema asimétrico, injusto e inconsistente, socavando sus obligaciones internacionales con el ambiente y los derechos humanos, además de fomentar la fragmentación del derecho internacional. Las empresas utilizan estas demandas para obtener millonarias compensaciones cuando los Estados, legítimamente y en cumplimiento de sus obligaciones, adoptan cambios normativos, regulatorios, políticas públicas o decisiones judiciales en favor de derechos de comunidades locales y de la protección de ecosistemas esenciales para la protección de la vida.

Este sistema contempla **el mecanismo de Solución de Controversias Inversionista - Estado (SCIE, o ISDS, por las siglas en inglés de Investor-State Dispute Settlement), un instrumento que se encuentra en tratados de libre comercio (TLC), en los tratados bilaterales de inversión (TBI) y otros acuerdos**, que les da poder a los inversores extranjeros para saltarse las leyes y tribunales de justicia nacionales, e iniciar demandas internacionales directamente en contra de países soberanos cuando sienten que sus inversiones han sido afectadas.

Desde 2016, Colombia ingresó a la lista de los países de América Latina demandados en estos tribunales de inversión. Empresas multinacionales del sector extractivo minero y de combustibles fósiles recurren al arbitraje supranacional más que cualquier otro sector cuando se intenta poner freno a sus abusos. **En el 2018, Colombia llegó a ser uno de los países más demandados en estas instancias, viéndose un “boom” de demandas.** De acuerdo al balance de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hasta finales del primer semestre de 2022, 12 procesos se encontraban abiertos y 7 más en etapa prearbitral **por un valor estimado de 9.8 billones de pesos<sup>1</sup>. La mayoría proviene del sector extractivo, especialmente minero<sup>2</sup>.**

Ahora mismo hay en curso una demanda contra Colombia de la multinacional Glencore, dueña de Cerrejón, que pretende obligar al Estado a pagar una millonaria indemnización debido al fallo de la Corte Constitucional, en favor de los derechos del pueblo wayúu. Este fallo suspendió fundadamente la expansión de uno de los tajos de la mina de carbón a cielo abierto en La Guajira para la protección del arroyo Bruno, fuente de agua fundamental en la región.

Otro ejemplo de este abuso de poder de las transnacionales es el de Eco Oro, empresa canadiense que buscaba explotar oro en el Páramo de Santurbán, y que demandó a Colombia por 736 millones de dólares pues, gracias a la movilización popular, se puso freno a dichas pretensiones que amenazaban uno de los ecosistemas más importantes del país. El tribunal de arbitraje falló en contra de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, no obstante, aún no se conoce el monto definitivo que se tendrá que pagar. Otras dos canadienses demandaron por el mismo motivo.

Esta clase de disputas e incluso **la sola amenaza de instaurar la demanda ha mostrado producir un efecto disuasorio, de enfriamiento o chantaje cuya intención es la de subordinar la soberanía nacional del Estado** en contra de la adopción de medidas para la protección ambiental y acción climática. A su vez, las disputas socavan el derecho de comunidades y pueblos a buscar justicia frente a los abusos y graves violaciones de grandes corporaciones que permanecen en la impunidad.<sup>3</sup>

De esta manera, el sistema **profundiza y perpetúa relaciones desiguales y coloniales, así como patrones históricos** de discriminación y despojo, siendo los pueblos indígenas quienes sufren de manera desproporcionada los efectos de proyectos relacionados con la inversión extranjera<sup>4</sup>. Estos efectos se replican para las comunidades negras, campesinas y urbanas marginalizadas. En la práctica, los tratados de inversión y los derechos que estos otorgan a las multinacionales terminan en una jerarquía superior a la del orden constitucional interno. Esto es particularmente crítico en un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad donde se requieren acciones determinantes y medidas urgentes frente a daños irreparables y efectos devastadores de la acción humana. Según la advertencia del Informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de 2022 este sistema de arbitraje de inversión conlleva el riesgo de bloquear la eliminación progresiva de los combustibles fósiles<sup>5</sup>. El Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente, David R. Boyd, **ha exhortado a los Estados a “Negociar la eliminación de los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados de los acuerdos internacionales de comercio e inversión o rescindir los acuerdos (porque tales mecanismos impiden a los Estados tomar medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación)”**.<sup>6</sup>

Un proyecto de transición justa, a la luz de las obligaciones internacionales, requiere dejar de incentivar la profundización de nuevas extracciones y anticipar el cierre de proyectos insostenibles. Por ello, es necesario prever el riesgo contingente de una avalancha de nuevas demandas por parte de empresas transnacionales que se niegan a renunciar a la codicia que destruye vidas y ecosistemas en favor de sus negocios, como los extractivismos de megaminería, el fracking y la extracción carbonífera y petrolera.

En Colombia, defender la vida, la naturaleza y el territorio ha costado a líderes y lideresas de movimientos, asesinatos, amenazas y estigmatización, siendo el país más peligroso del mundo para las personas defensoras del ambiente. En este contexto, **es urgente la necesidad de impedir que la búsqueda de justicia ante abusos de multinacionales, daños y pasivos socioambientales, laborales, financiación del paramilitarismo, amenazas o asesinato de líderes sindicales se vea sabotada por este sistema.**

A diferencia de la discrecionalidad de los Estados de regular las inversiones, estos tienen la obligación imperativa de actuar para proteger los derechos humanos y regular la conducta de los inversionistas frente a violaciones a los derechos humanos o daños ambientales. En ese sentido, **fallos anteriores en casos de arbitraje supranacional han mostrado que los acuerdos internacionales de inversión no son compatibles con el deber de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos en virtud del derecho internacional**, aun cuando estos tratados incluyen lenguaje de derechos humanos y ambiente o excluyan ciertos sectores<sup>7</sup>. En otras palabras, **Colombia no puede continuar sometida a un sistema que no está atado a estas obligaciones internacionales.**

Durante muchos años, organizaciones de la sociedad civil internacional han documentado y denunciado la forma en que el sistema vulnera los derechos, el medio ambiente y la democracia. El sistema también ha sido cuestionado por gobiernos y por organismos internacionales. En junio del 2021, el grupo de empresas y DDHH de la ONU presentó un informe<sup>8</sup> en el que da cuenta de la incompatibilidad de las obligaciones de proteger derechos humanos por parte de los Estados frente a estos tratados de inversión. En esa vía recomendó a los Estados renegociar o rescindir dichos tratados. Tanto en este informe, como en numerosos reportes e investigaciones<sup>9</sup>, han recopilado diversas críticas que han movilizado a organizaciones a demandar a los Estados revisar y salirse de estos tratados.

Estos reportes e investigaciones han demostrado que la firma de tratados de inversión no garantiza la llegada de inversiones extranjeras, así como tampoco la revisión o denuncia de estos acuerdos aleja las inversiones de un país<sup>10</sup>. Por el contrario, **estos acuerdos y el mecanismo de arbitraje inscritos en ellos, representan un detrimento a las finanzas públicas debido a que las empresas exigen en compensación millones o hasta miles de millones de dólares**, sin contar los gastos legales e intereses. También existe evidencia de que **estos arbitrajes disuaden las decisiones de los gobiernos de implementar políticas públicas en favor de los derechos humanos y el ambiente**, e interfieren en los sistemas de justicia nacionales perjudicando el acceso a la justicia y reparación de comunidades afectadas por el poder empresarial.<sup>11</sup>

Por otro lado, el sistema es unidireccional, dado que solo las empresas pueden demandar a los Estados. Las comunidades afectadas en estos casos tampoco pueden participar de los litigios. Las compensaciones exigidas por las empresas son desmesuradas, ya que por lo general las compañías exigen compensaciones por ganancias futuras no percibidas. Por todas estas razones, **varios gobiernos del sur y norte global han denunciado o revisado los acuerdos de inversión**, tal es el caso de Pakistán, Ecuador, Bolivia, India, Indonesia y Sudáfrica quienes han usado la rescisión unilateral de acuerdos internacionales de inversión desequilibrados. En mayo de 2020, 23 miembros de la Unión Europea firmaron un acuerdo para terminar los Acuerdos Internacionales de Inversión entre ellos, así como varios han anunciado su salida del Tratado sobre la Carta de Energía dado su incompatibilidad con sus obligaciones internacionales en torno al cambio climático (Polonia, España, Alemania, Francia, Eslovenia, Luxemburgo, y los Países Bajos)<sup>12</sup>. Incluso en el tratado de libre comercio renegociado entre Canadá, Estados Unidos y México, que entró en vigencia en 2020, el mecanismo SCIE fue eliminado entre Canadá y Estados Unidos.

**Por todas las razones expuestas, solicitamos al gobierno de Colombia:**

**#1 Iniciar una revisión integral de los Acuerdos de Inversión y Tratados de Libre Comercio que contengan el mecanismo de solución de controversias inversionista - Estado**, con el fin de denunciar, renegociar o rescindir urgentemente todos los acuerdos internacionales de inversión existentes, con el fin de eliminar el mecanismo SCIE. De esta forma, es posible rescatar la soberanía del Estado para regular en interés del ambiente y del pueblo colombiano, defender la independencia y rol del sistema judicial, así como, respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas y demás comunidades que buscan justicia y rendición de cuentas antes los daños ambientales y violaciones de sus derechos.

**#2 Denunciar el Convenio del CIADI** y promover el uso de la justicia nacional para la resolución de disputas entre inversor y Estado.

**#3 No firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones** y mecanismo SCIE.

**#4 Colombia debería entrar en una moratoria** antes de volver a firmar o a ratificar más acuerdos internacionales de inversión.

**#5** Los esfuerzos del Gobierno deben centrarse en crear mecanismos vinculantes de rendición de cuentas y responsabilidad de las empresas, fortalecer obligaciones de planes de cierre, restauración ambiental y reparación integral a las víctimas de abusos empresariales de transnacionales. En ese sentido, el gobierno de la Potencia Mundial para la Vida, debe liderar la negociación del **Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos en la ONU** que obligue a las empresas transnacionales a rendir cuentas por sus impactos en los territorios y a reparar los daños que provocan, en concordancia con las propuestas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas a decidir sobre sus territorios.

La declaración fue firmada por más de 300 organizaciones de Colombia, de países de América Latina, además de Estados Unidos, Europa, África, Asia y Oceanía.

## COLOMBIA

- Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
- Comité para la defensa del Agua y el Páramo de Santurbán
- Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" – CAJAR
- Censat Agua Viva
- Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales -GIDCA- de la Universidad Nacional de Colombia
- Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial - Siembra
- Semillero de Investigación en estudios sobre minería, de la Facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad de Antioquia
- Amar Es Más, Quindío
- Asociación Folklorica Palos, Cuerdas y Kotizas - PCK
- Asociación Defensora de los Animales y la Naturaleza, ADAN
- Asociación Memoria Raizal
- Asociación MINGA
- Asociación para el desarrollo sostenible - Semillas
- Asociación Unidad Campesina de Santander
- Asociación red de recicladores REHOBOT
- Avatar Comunicaciones
- Bakata- Escuela Popular Ambiental y Cultural de P.A.
- Bosque de Niebla Falla del Tequendamá
- Centro de Estudios Rurales Ambientales y Apoyo Legal
- Central Ecológica de Santander
- Comité ambiental de Piedras Tolima
- Comité Páramo Cruz Verde
- Comunidades Unidas
- Colectivo Animalista de Tibasosa "MascoTiba" Tibasosa-Boyacá
- Colectivo Justicia Racial
- Colectivo de Objetoras y Objetores por • Conciencia: Quinto Mandamiento
- Comité Medioambiental Cali Comuna 22
- Comité por la Defensa del Agua, la vida y el territorio del Cauca
- Concejo Comunitario Los Cimarrones
- Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS)
- Coopebis Cooperativa de Bienestar
- Corporación ACCIÓN VIVA
- Corporación Buen Ambiente Corambiente
- Corporación Casa Amazonia - Mocoa Putumayo
- Corporación Ciclamanga
- Corporación Colectivo CreAcción
- Corporación Grupo Semillas
- Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana
- Corporación para el Desarrollo Sostenible y el Patrimonio Cultural ACCION VIVA
- Corporación para el Desarrollo del Oriente "Compromiso"
- Corporación Trabajadores por la Tierra
- Dignidad y compromiso
- Ecofeminisarte
- Edil comuna 1 de Bucaramanga
- Familias Custodias de Semillas libres - Armenia, Quindío
- Federación Nacional de Artistas (FEDEARTES)
- FIAN Colombia
- Fundación Cultura Democrática
- Fundación del Sinú
- Fundación Guagua
- Fundación de mujeres tejiendo vida

- Fundación Nydia Erika Bautista
- Fundación Ecológica Bacata
- Fundación Lazos de Dignidad
- Fuerza Social y Solidaria de Santander
- Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales- GIDCA , Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
- Instituto Nacional Sindical - CEDINS
- Instituto Popular de Capacitación - IPC
- Junta de acción comunal del pedral - Santander
- La Batucada Guaricha
- La Casa de los Colores
- Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero
- Movimiento Alianza por el Agua
- Movimiento Nacional Carcelario
- Movimiento Nacional Ambiental
- Movimiento Social en defensa de los Ríos Sogamoso y Chucuri-Movimiento Ríos Vivos
- Morro de Agua
- Observatorio VigíaAfro
- Observadores de ddhh y Parapolítica
- Pensamiento y Acción Social - PAS
- Por la defensa del Volcán Nevado del Ruiz y sus zonas de amortiguamiento
- Proceso por la defensa de la zona de amortiguamiento del Volcán Nevado del Ruiz
- Rebelión o Extinción Bogotá
- Red de Acueductos comunitarios de Monquirá
- Red de Mujeres en Defensa de la tierra y la Autonomía
- Red de Pueblos Hermanos. Provincia de occidente y Ricaurte. Boyacá
- Resistencia A La Minería Y El Extractivismo- RAME
- Sabiduría Ambiental
- Sindicato Nacional de Empleados de la DIAN (SINEDIAN)
- Sintrasolla
- Unión de Ciudadanas de Colombia - Capítulo Antioquia
- Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Cervecera, Bebidas, Alimentos, Malteros y Similares (USTIAM)
- Unidad Estudiantil Uteista
- Urdimbre Radio 100.6fm Tibasosa-Boyacá
- Veeduría alerta ambiental

## AMÉRICA LÁTINA

- Plataforma América Latina mejor sin TLC (Regional)
- Acción Ecológica (Ecuador)
- Asamblea Argentina mejor sin TLC (Argentina)
- ATTAC Argentina (Argentina)
- Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH (Honduras)
- Asamblea Jáchal No Se Toca (Argentina)
- Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (Argentina)
- Asociación Americana de Juristas (Regional)
- Acción Colectiva Socioambiental. A.C, (México)
- Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) (Regional)
- Centro Hondureño de Promoción Para el Desarrollo Comunitario ( CEHPRODEC) (Honduras)
- Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo SJ" - CSMM (Ecuador)
- Centro de Promoción y Educación Profesional Vasco de "Quiroga" (México)
- Chile Sin Ecocidio (Chile)

- Comisión DDHH Quilpue (Chile)
- Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales - Colectivo CASA (Bolivia)
- Colectivo Voces Ecológicas COVEC (Panamá)
- Comité Oscar Romero - Sicsal (Chile)
- Comité de DD.HH. y ecologicos de Quilpue (Chile)
- CORASON Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca Totonacapan (México)
- Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina (Argentina)
- Federación Nacional de Asociaciones Cooperativas Agropecuarias (FENACOA) (El Salvador)
- Frente Popular en Defensa del Soconusco (México)
- Fuerza Socioambiental en Defensa de los Territorios (Chile)
- Fundación Grupo Efecto Positivo (Argentina)
- GeoComunes (México)
- Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo (Ecuador)
- Internacional de servicios publicos Interamericas (Regional-Interaméricas)
- Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) (Chile)
- Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Puchuncavi Quintero (Chile)
- Movimiento Chao Pescao (Chile)
- Movimiento de Pobladores Organizados (Chile)
- Mujeres en Resistencia (Chile)
- Nueva Democracia Comuna NDC (Cuba)
- Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) (Chile)
- Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México (México)
- Plataforma Chile Mejor Sin TLC (Chile)
- Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (México)
- Programa de las Américas (México)
- Programa de las Américas (México/Regional)
- Proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera SUR /PVIFS, Chiapas (México)
- Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (México)
- Project Allende (Argentina)
- REBRIP - Red Brasileña por la Ingración de los Pueblos (Brasil)
- Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA (Chile)
- Red Ecuador Decide Mejor sin TLC (Ecuador)
- Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz (México)
- Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) (México)
- Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio - RMLC (México)
- Red de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente (República Dominicana)
- Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz (México)
- Rizoma Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes (México)
- Slow Food comunidad Guasco Resiste (Chile)
- Unión de Lucha Anticapitalista (México)

## INTERNACIONAL

- Center for International Environmental Law - CIEL (EEUU)
- Global Justice Now - GJN (Reino Unido)
- Institute for Policy Studies - IPS, Global Economy Program (EE.UU.)
- London Mining Network (Reino Unido)
- Mining Watch Canada (Canadá)
- TerraJusta (Bolivia/Reino Unido)
- Transnational Institute - TNI (Países Bajos)
- War on Want (Reino Unido/International)
- ask!; Grupo de Trabajo Suiza Colombia/ Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien (Suiza)
- Alliance Sud (Switzerland)
- ALTSEAN-Burma (Burma/Myanmar)
- alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes (Catalunya)
- Amigos de la Tierra España (España)
- AbibiNsroma Foundation (Ghana)
- Amazon Watch (EE.UU.)
- Appui aux Initiatives Communautaire de Conservation de l'environnement et de Développement Durable (République Démocratique du Congo)
- Association For Promotion Sustainable Development (India)
- Asociación de estudiantes y creadores colombianos en Francia- COLCREA (Francia)
- Asociación Millaray (España)
- Asociación Ñamatu (España)
- Asociación de Solidaridad con Colombia, KATIO (España)
- Asociación Zehar-Errefuxiatuekin (País Vasco, España)
- Atlantic Regional Solidarity Network (Canadá)
- ATTAC Norway (Noruega)
- ATTAC France (Francia)
- Both ENDS (Países Bajos)
- Broederlijk Delen (Bélgica)
- Canadian Centre for Policy Alternatives (Canadá)
- Canadian Labour Congress
- Canadian Union of Public Employees (CUPE) / Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) (Canadá)
- Canadian Union of Public Employees New Brunswick Division (Canadá)
- Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert, Québec (Canadá)
- Central America Support Committee (Canadá)
- Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina - FDCL (Alemania)
- Centro internacional de solidaridad obrera (CISO) / Centre international de solidarité ouvrière (CISO) (Francia)
- CETRI - Centro tricontinental (Bélgica)
- Climáximo (Portugal)
- CoDevelopment Canada (CoDev) - CoDesarrollo Canadá
- Colombia Solidarity - Denmark (Dinamarca)
- Comisión Ética Internacional por la Verdad-Madrid (España)
- Community Peacemaker Teams - CPT Colombia (EE.UU.)
- Comité Óscar Romero de Valladolid (España)
- Comité Óscar Romero de Vigo (España)
- Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (Canadá)
- Confederación General del Trabajo (CGT) (España)
- Colombian Working Group (Canadá)
- Common Frontiers (Canadá)
- Comité Pour les Droits humains en Amérique Latine (Canadá)
- Consumers' Association of Penang (Malasia)
- Conseil central du Montréal métropolitain - CSN (Canadá)
- Cooperació (España)
- Cross Border Network for Justice and Solidarity (EE.UU.)
- Decolonial Centre (Brazil/Sudan/UK)
- Denver Justice and Peace Committee (DJPC) (EEUU)
- Développement et Paix - Caritas Canada (Canadá)
- DKA Austria - Hilfswerk der katholischen Jungschlar (Austria)
- Earthworks (EE.UU.)
- EcoNexus (Reino Unido)
- Ecologistas en Acción (España)
- Entraide et Fraternité (Bélgica)
- European Coordination Via Campesina (Regional/Europe)
- Extinction Rebellion Ireland (Irlanda)
- Financial Justice Ireland (Irlanda)
- France Colombie Solidarité (Francia)
- FreeBruno-Alemania (Alemania)
- Friends of the Earth International (Internacional)
- Fridays for Future Neustadt (Alemania)
- Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland (Reino Unido)
- GeneEthics (Australia)
- Grandmothers Advocacy Network (Canadá)
- Global Network - Ethnic Peoples and Peace // Red Global Pueblos Etnicos y Paz (Canadá/ Colombia)
- FDCL - Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Alemania)
- Fresh Eyes (Reino Unido)
- Human and Environmental Development Agenda (Nigeria)
- Indonesia for Global Justice (IGJ) (Indonesia)
- Informationsgruppe Lateinamerika - IGLA (Austria)
- kolko - Menschenrechte für Kolumbien e. V. (Alemania)
- Igapo Project (Francia)
- Internationaler Versöhnungsbund - österreichischer Zweig (Austria)
- It's Our Future (Nueva Zelanda)
- Lafede.cat - Organitzacions per a la Justicia Global (Catalunya - Estado español)
- LASC - Latin American Solidarity Center (Irlanda)
- Latin America Bureau (Reino Unido)
- La Intersindical (España)
- Local Futures (EE.UU.)
- Les Amls du Monde diplomatique (Francia)
- Mazingira Network - Tanzania (MANET) (Tanzania)
- Maryknoll Office for Global Concerns (EE.UU.)
- Moccasin Footprint Society (Canadá)
- Mining Justice Action Committee (Canadá)
- Mining Justice Alliance (Canadá)
- Mining Injustice Solidarity Network (Canadá)
- Madhu Verma Migrant Justice Centre (Canadá)
- NATUREFRIENDS GREECE (Grecia)
- Natural Justice (Sudáfrica)
- National Lawyers Guild International Committee (EE.UU.)
- Network Lobby for Catholic Social Justice (EE.UU.)
- New Brunswick Federation of Labour (Canadá)
- New York Trade Justice Coalition (EE.UU.)
- NOAH - Friends of the Earth Denmark (Dinamarca)
- Oficina EcuMénica para la Paz y la Justicia e.V. (Alemania)
- Observatori DESC (España)
- Occupy Bergen County (EE.UU.)
- ONG AFRICANDO (España)
- Platform Duurzame en Solidaire Economie (Países Bajos)
- PowerShift e.V. (Alemania)
- Projet accompagnement solidarité Colombie (Canadá)
- Public Citizen (EE.UU.)
- Public Service Alliance of Canada -Alliance de la Fonction publique du Canada (Canadá)
- Reds - Red de solidaridad para la transformación social (España)
- Rethink Trade (EE.UU.)
- Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth) (Malasia)
- Salva la Selva (España)
- Sisters of Mercy of the Americas Justice Team (EE.UU.)
- Solidarite Ci Sutura (Senegal)
- The Corner House (Reino Unido)
- The Future We Need (Global)
- Trade Justice Education Fund (EE.UU.)
- Trade Justice New York Metro (EE.UU.)
- Trade Justice PEI (Canadá)
- Trade Unions for Energy Democracy (TUED) (EE.UU.)
- Transform!at (Austria)
- Unidas por la Paz - Alemania (UPA) (Alemania)
- Washington Fair Trade Coalition (EE.UU.)
- Witness for Peace Solidarity Collective (EE.UU.)
- Red europea de Comités Oscar Romero (SICALJL-Europa) (Bélgica)
- Regroupement pour la responsabilité sociale (RRSE) (Canadá)
- RQMI - Réseau québécois pour une mondialisation inclusive (Canadá)
- Solidarité Laurentides Amérique Centrale (Canadá)
- STEILAS sindicato de trabajadoras/os de la Enseñanza (España)
- Stop Blood Coal Ireland (Irlanda)
- SUDS - Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació (España)
- Sustainable Holistic Development Foundation (SUHODE) (Tanzania)
- Uganda Peace Foundation (Uganda)
- Unitarian Universalists for a Just Economic Community (EE.UU.)
- United Church of Christ, Justice and Local Church Ministries (EE.UU.)
- vzw Climaxi (Bélgica)
- Welthaus Viena (Austria)
- Wild Legal (Francia)
- WIDE - Network for Women's Rights and Feminist Perspectives in Development (Austria)
- Women's Budget Group (Reino Unido)
- ZEA (Francia)
- ZEHAR-Errefuxiatuekin (España)

## MÁS INFORMACIÓN

Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán • <https://www.facebook.com/comitesanturban/>

La Guajira le Habla al País • <https://www.facebook.com/laguajirahabla/>

COLOMBIA, un boom de demandas de inversores extranjeros. Informe sobre millonarias demandas de trasnacionales contra Colombia <https://www.colectivodeabogados.org/presentamos-informe-sobre-millonarias-demandas-de-trasnacionales-contra-colombia/>

Amicus Curiae presentado a la Corte Constitucional de Colombia – En Defensa del Arroyo Bruno y de las Comunidades Wayúu, y en rechazo a la demanda de Glencore en contra del país • [https://terra-justa.org/dc\\_2017/wp-content/uploads/2022/08/AMICUS-CURIAE\\_-\\_Colombia-DemandaISDS-ArroyoBruno-Agosto-2022.pdf](https://terra-justa.org/dc_2017/wp-content/uploads/2022/08/AMICUS-CURIAE_-_Colombia-DemandaISDS-ArroyoBruno-Agosto-2022.pdf)

Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblos y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje internacional • <https://ips-dc.org/wp-content/uploads/2019/06/ISDS-Mining-Latin-America-Report-Formatted-SPANISH.pdf>

Los impactos del sistema de protección de inversiones en América latina • <https://isds-americalatina.org/>

---

1 • Ver Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Informe de Litigiosidad a Junio 30 de 2022 [https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes\\_litigiosidad\\_2022/Informe\\_litigiosidad\\_VF\\_260722.pdf](https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2022/Informe_litigiosidad_VF_260722.pdf)

2 • Ver “Colombia, un boom de demandas de inversores extranjeros”, mayo de 2023, Transnational Institute (TNI) y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), en: <https://isds-americalatina.org/perfiles-de-paises/colombia/>

3 • Ver Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises: Human rights- compatible international investment agreements (A/76/238) <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/208/09/PDF/N2120809.pdf?OpenElement>, July 27, 2021.

4 • Ver Reports of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples (A/70/301), <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/249/09/PDF/N1524909.pdf?OpenElement>, August 7, 2015, and (A/HRC/33/42), <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/178/84/PDF/G1617884.pdf?OpenElement>, August 11, 2016.

5 • Ver Intergovernmental Panel on Climate Change, Sixth Assessment Report: Climate change 2022: mitigation of climate change, <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/>, 2022, pg. 14-72 and pg. 14-81.

6 • Ver Report of the Special Rapporteur on human rights and the environment: on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, David R. Boyd: The human right to clean, healthy and sustainable environment: a catalyst for accelerated action to achieve the Sustainable Development Goals (A/77/284), <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/648/97/PDF/N2264897.pdf?OpenElement>, August 10, 2022, para. 80(j).

7 • Ver IAREporter, Analysis: Arbitrators in Eco Oro v. Colombia Environmental Mining Ban Dispute Disagree on Police Powers and Scope of Minimum Standard of Treatment in Canada-Colombia-FTA; Majority Finds MST Breach, and Decides that General Exceptions Do Not Relieve Colombia from its Duty to Pay Compensation, <https://www.iareporter.com/articles/analysis-arbitrators-in-eco-oro-v-colombia-environmental-mining-ban-dispute-disagree-on-police-powers-and-scope-of-minimum-standard-of-treatment-in-canada-colombia-fta-majority-finds-mst-breach-an/>, September 16, 2021.

8 • Ver Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, supra note 2.

9 • Ver: Moore Jen y Pérez Rocha Manuel, “Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblos y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje internacional”, Institute for Policy Studies, Miningwatch Canada y Center for International Environmental Law, 2019. <https://ips-dc.org/report-extraction-casino/>; y Cecilia Olivet y Luciana Ghitto, “Justicia Paralela: cómo el sistema de protección de inversiones pone en riesgo la independencia del poder judicial en América Latina?”, Transnational Institute e Internacional de Servicios Públicos (ISP), 2021. [https://www.tni.org/files/publication-downloads/justicia\\_paralela\\_esp.pdf](https://www.tni.org/files/publication-downloads/justicia_paralela_esp.pdf)

10 • Ver Pohl, J., Societal benefits and costs of International Investment Agreements, <https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2019/03/Societal-benefits-and-costs-of-International-Investment-Agreements.-A-CRITICAL-REVIEW-OF-ASPECTS-AND-AVAILABLE-EMPIRICAL-EVIDENCE.pdf>, 2018. E3G Paper: Spurring cross-border private investment in renewables, <https://e3g.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/E3G-Briefing-Spurring-Global-Private-Investment-in-Renewables.pdf>, 2021.

11 • Ver Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on ecological crisis climate justice and racial justice (A/77/2990), <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77549-report-special-rapporteur-contemporary-forms-racism-racial>, October 25, 2022; Also see Public Services International (PSI) & the Transnational Institute Justicia Paralela: ¿Cómo el Sistema de protección de inversiones pone en riesgo la independencia del poder judicial en América Latina? [https://www.tni.org/files/publication-downloads/justicia\\_paralela\\_esp.pdf](https://www.tni.org/files/publication-downloads/justicia_paralela_esp.pdf), Marzo 2021.

12 • Ver: <https://friendsoftheearth.eu/energy-charter-treaty/> Vale agregar que el 24 de noviembre de 2022, el Parlamento Europeo adoptó por amplia mayoría una resolución en la que pide a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión Europea que empiecen a preparar una salida coordinada del Tratado sobre la Carta de Energía y un acuerdo que excluya la aplicación de la cláusula de extinción entre las partes contratantes que lo deseen.

**SUMÁ LA FIRMA DE TU ORGANIZACIÓN**



Declaración Nacional e Internacional

**RECUPEREMOS  
LA SOBERANÍA  
de COLOMBIA  
EN DEFENSA  
DEL AGUA, LA VIDA  
Y LOS TERRITORIOS**